



Crónica PARA EL Futuro

EL MERCURIO | EL MERCURIO DE VALPARAÍSO

SANTIAGO DE CHILE, VIERNES 16 DE MAYO DE 2025

Representantes de las industrias del salmón, eléctrica e hidrógeno:

Dirigentes gremiales entregan sus ideas para mejorar relación con las comunidades

Entre sus principales propuestas para hacer más expedito el proceso de evaluación de proyectos están avanzar en nuevas normas más claras respecto de la participación ciudadana —que todos valoran—, fortalecer el rol del Estado en la coordinación de los distintos servicios públicos involucrados en la tramitación de permisos y fomentar el diálogo temprano con los habitantes de las zonas donde se planea desarrollar iniciativas, para así reducir la conflictividad y evitar la judicialización posterior.

EQUIPO DE CRÓNICA PARA EL FUTURO



SalmonChile: Se necesitan marcos normativos "robustos, claros y ágiles"

"Creemos que es fundamental que tanto las comunidades aledañas a los proyectos de inversión como los sectores productivos que ingresan al sistema cuenten con información temprana, transparente, y reglas claras, que brinden claridad y certeza de toda índole"

El dirigente gremial cree que es fundamental darles certezas a los inversionistas frente a la excesiva judicialización de proyectos. Dice que, en la práctica, esto se ha traducido en "una gran cantidad de tramitaciones paralizadas inyectando incertidumbre y haciendo menos competitivas las inversiones en Chile versus países competidores"

Cree necesario contar con marcos normativos "robustos, claros y ágiles", ya que, a su juicio, son requisitos fundamentales para sacar adelante proyectos con "legitimidad social y visión de país con una mirada a largo plazo". Con ello, afirma, estas iniciativas podrían permitir la reactivación económica y hacer de Chile un país más atractivo para invertir, "especialmente en zonas aisladas".

Consejo del Salmón: Falta una "política de Estado que sea capaz de proyectar el desarrollo"

Loreto Seguel, presidenta ejecutiva del Consejo del Salmón (que reúne a empresas como AquaChile, Mowi Chile, Cormat, entre otras), asegura que la industria salmonera mantiene un trabajo regular hace mucho tiempo con las comunidades locales y que ello "no se limita únicamente a la evaluación de proyectos particulares". Cuenta que existe un diálogo permanente con los distintos actores sociales y que entre cinco empresas asociadas al gremio tuvieron casi mil instancias de diálogo en 2024, "lo que implica casi el doble de las realizadas hace tres años".

"Para nosotros es fundamental llegar a un gran número de personas, a los liderazgos sindicales, femeninos y territoriales. Es importante que en la discusión pública respecto de la industria, de sus desafíos y oportunidades, todos tengan voz", destaca Seguel.

La dirigente afirma que la industria está generando identidad en las regiones, por ejemplo, "el sur austral de Chile ha construido un compromiso tangible con ella". En este contexto, cree que lo que explica la "imposibilidad de crecer y dinamizar la salmonicultura no es la falta de diálogo social, sino que es la ausencia de una política de Estado que sea capaz de proyectar el necesario desarrollo de esta industria de manera sostenible".

GPM AG: "Espacios de diálogo en fases iniciales" para reducir los conflictos

"Creemos que el desarrollo de proyectos de inversión y la participación ciudadana no son objetivos en tensión, sino dimensiones que deben integrarse de forma armónica", indica el director ejecutivo de la Asociación Gremial de Pequeños y Medianos Generadores (GPM AG), Mauricio Utreras.

A su juicio, "muchas de las dificultades que enfrentan hoy los proyectos no se originan en un rechazo estructural por parte de las comunidades, sino más bien en la falta de información temprana".

Por eso, opina que "cuando las comunidades solo acceden a los proyectos en etapas avanzadas, es más probable que surjan tensiones o desconfianzas". De ahí que su principal llamado es a "institucionalizar esta relación mediante reglas claras, espacios de diálogo en fases iniciales y procedimientos que aseguren tanto la voz de los territorios como la certeza para los titulares. Esto no solo facilita la construcción de confianzas, sino que reduce significativamente el riesgo de conflictividad o judicialización".

Para Utreras, "la participación y la agilidad no son excluyentes". En ese sentido, cree que una participación bien estructurada fortalece los proyectos y legitima la inversión, y que "un Estado moderno, con procedimientos claros y herramientas digitales, puede garantizar simultáneamente el desarrollo económico y el respeto por los territorios".

Generadoras de Chile: "Una relación fluida con las comunidades comienza con el diálogo temprano"

"Desde Generadoras de Chile creemos que una relación fluida y de largo plazo con las comunidades comienza con el diálogo temprano", postula el director ejecutivo de la asociación gremial, Camilo Charme.

Por eso, cuenta que se encuentran trabajando junto con la Universidad Católica en la elaboración de principios orientadores que guíen la llegada de los proyectos al territorio.

Esta iniciativa busca promover una "conversación oportuna y transparente con autoridades locales, comunidades y actores relevantes", asevera.

El objetivo de la agrupación gremial, que incluye entre sus asociados a empresas como Colbún, Enel y Engie, es que la "inserción temprana facilite acuerdos, genere valor compartido y evite que la participación ciudadana se vea como un obstáculo, sino como una oportunidad para mejorar el desarrollo de los proyectos", sostiene Charme.

Agrega que es relevante que el Gobierno adquiera un rol protagónico. "Debe liderar, coordinar y armonizar a los distintos servicios sectoriales que tienen participación en el desarrollo y aprobación de proyectos de generación eléctrica", que, para él, son iniciativas clave para "la transición energética y el desarrollo de la economía de nuestro país".

Transmisoras de Chile: "Mientras más diálogo, mayor posibilidad de lograr acuerdos"

Para Javier Tapia, director ejecutivo de la Asociación de Transmisoras de Chile, es fundamental que la participación sea efectiva.

"Me refiero con ello a que se genere la posibilidad real y verdadera de que las personas puedan incidir en un proyecto a través de la interacción que tienen con las empresas; producir cambios reales que impliquen un mejoramiento de su entorno y una afectación lo menos gravosa posible a sus condiciones materiales de vida", explica.

En esa línea, descarta que el proceso de consulta consista "solo en escuchar y recibir opiniones por parte de un desarrollador; es también una oportunidad para mejorar".

Y añade: "Siempre habrá trade-offs entre la necesidad de concretar avances sociales y las afectaciones individuales o comunitarias que esos avances producen", por lo mismo, el líder gremial plantea que es clave encontrar el camino para destruir o resolver los potenciales conflictos.

"Por ello, más que poner el acento en la temporalidad del proceso, en cuando se realiza, lo importante es encargarse del fondo. Lo que ocurre en una participación temprana es que es funcional al objetivo final: mientras más diálogo, mientras más tiempo se dé a conocerse entre las partes y sus respectivas necesidades, mayor será la posibilidad de lograr acuerdos".

H2 Chile: "Si el proceso es bien llevado, se podría aspirar a incentivos de fast-track"

Para el director ejecutivo de la Asociación Chilena del Hidrógeno (H2 Chile), Marcos Kulka, "la clave está en transformar la participación temprana de las comunidades en un activo positivo de desarrollo para el territorio y el proyecto, donde se pueda construir en conjunto, en forma temprana, antes de ingresarlo al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA)".

Eso sí, para Kulka es "importante considerar a las comunidades que realmente se encuentran en la zona donde se desarrollarán los proyectos".

Asimismo, pide que se establezca "una interacción transparente y de verificación pública" entre las partes involucradas en el proceso, para que se alcancen alianzas vinculadas a través de "un instrumento legal que permita celebrar acuerdos de beneficio mutuo entre las comunidades y las empresas".

El dirigente gremial considera que un proceso correcto podría entregar lineamientos para facilitar el desarrollo de proyectos de hidrógeno verde en el país.

"Si el proceso es bien llevado, con altos estándares, con valor real para el territorio y las comunidades, con medidas de mitigación y compensación significativas, se podría aspirar a incentivos de fast-track, o aprobación acelerada del proyecto, o acceso preferente a fondos de desarrollo temprano", plantea.

H2V Magallanes AG: "Surge la necesidad de un árbitro con buen criterio"

Salvador Harambour, director ejecutivo de H2V Magallanes AG, también pone el foco en la participación ciudadana y menciona que esta "no tendría por qué retrasar ni paralizar los proyectos, habida cuenta de que es una herramienta que está diseñada para complementarlos o mejorarlos, no para frenarlos".

Así, desde su punto de vista, las empresas tienen el deber de procurar espacios "para que la integración temprana con la comunidad tenga lugar y no se trate solo de cumplir con un checklist".

Sin embargo, plantea que a menudo "las comunidades, organizaciones, ONG, etcétera, prefieren no participar de manera temprana en las mesas de diálogo o talleres de trabajo, donde se podrían contrastar visiones y trabajar en conjunto con las empresas evitando las rispideces posteriores". En ese sentido, añade que "es claro que no siempre existe la voluntad de trabajar en mejorar proyectos, sino una franca oposición dogmática a ellos".

Sobre cómo comenzar a solucionar esto y hacer que la participación sea un aporte a los proyectos, opina que se necesita "un árbitro que, con buen criterio, establezca límites y marcos de referencia que garanticen un mínimo de certezas en la evaluación ambiental de proyectos de inversión, claves para el esperado crecimiento del país y sus regiones".

RESUMEN DE PROPUESTAS DE ESTA EDICIÓN

1 Sancionar con castigos económicos a quienes reclaman con el fin de dilatar los proyectos de inversión (PÁGINA 3).

2 Que el Ejecutivo deba tener instancias para dialogar con las comunidades (PÁGINA 7).

3 Exigir que titulares de proyectos tengan consultoras independientes y no contratadas por las mismas empresas (PÁGINA 8).

4 Crear un servicio público autónomo que dé acceso a la justicia ambiental a las personas (PÁGINA 8).

5 Aprobar una ley que transparente el financiamiento de todas las organizaciones privadas (PÁGINA 8).

6 Establecer criterios claros para definir quiénes pueden opinar en el proceso de participación ciudadana de un proyecto, bajo qué condiciones, en qué etapa y con qué objetivos (PÁGINAS 3, 11 y 12).

7 Acompañamiento de las comunidades por parte del Estado, a través de los municipios, para que estas puedan tener una participación informada en los procesos (PÁGINA 11).

8 Establecer causales de rechazo de las observaciones ciudadanas en el proceso de evaluación de impacto ambiental para diferenciar aquellas pertinentes de las que no lo son (PÁGINA 11).

9 Mayor involucramiento y a lo largo del tiempo de los desarrolladores del proyecto respecto de la participación ciudadana desde el ingreso a evaluación hasta que se construye, opera y cierra (PÁGINA 11).

10 Establecer una autoridad que dirima, antes de que ingrese al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), si un proyecto requerirá o no consulta indígena (PÁGINA 11).

11 Tener un sistema único de reclamos y limitar la recursividad (PÁGINA 11).

12 Generar una tercera vía de ingreso para proyectos estratégicos con estudios, plazos y procedimientos distintos para su evaluación (PÁGINA 11).

13 Evaluar lo positivo: no solo el impacto ambiental, sino también la puesta en valor, el aporte al empleo y las externalidades positivas de un proyecto para las comunidades (PÁGINA 11).

14 Formar una comisión asesora presidencial al inicio del próximo periodo de gobierno para buscar propuestas transversales de cómo mejorar el sistema (PÁGINA 11).

15 Institucionalizar la participación temprana de las comunidades antes de ingresarlo al Sistema de Evaluación Ambiental (PÁGINA 12).

16 Contar con marcos normativos robustos y claros para evitar la excesiva judicialización (PÁGINA 12).

17 Crear un árbitro que establezca límites y cree marcos de referencia para garantizar un mínimo de certezas en la evaluación ambiental de proyectos de inversión (PÁGINA 12).

18 Transparentar el financiamiento de las ONG y su procedencia (PÁGINAS 10 y 11).